

JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 3

PALMA DE MALLORCA

Modelo: S40120

CALLE JOAN LLUIS ESTELRICH, N°. 10.- 07003.- PALMA.-
971.72.93.76

Equipo/usuario: RDG

N.I.G: 07040 45 3 2017 0001592

Procedimiento: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000150 /2017 /

Sobre MULTAS Y SANCIONES

De D/ña: [REDACTED]

Abogado: PATRICIA DE LAS HERAS FERNANDEZ

Procurador Sr./a. D./Dña: MARIA ISABEL MUÑOZ GARCIA

Contra D/ña: AYUNTAMIENTO DE SANTA EULALIA DEL RIO

Abogado:

Procurador Sr./a. D./Dña: LUISA MARIA ADROVER THOMAS

D^a. MAYTE NIETO PEÑA, Letrado de la Administración de Justicia de JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 3, de los de PALMA DE MALLORCA.

POR EL PRESENTE HAGO CONSTAR: Que en los autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO N. 150/2017 ha recaído SENTENCIA N°. 300/2018, del tenor literal:

SENTENCIA N°. 300/2018

En Palma de Mallorca, a 19 de septiembre de 2018.

Vistos por D. PEDRO ANTONIO MAS CLADERA, Magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de esta Ciudad, los presentes autos de **Procedimiento Ordinario núm. 150/2017**, incoados en virtud de recurso interpuesto por la Procuradora D^a. María Isabel Muñoz García, en nombre y representación D. [REDACTED], asistido por la Letrada Doña Patricia de las Heras Fernández, siendo parte demandada el **AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU**, representado por la Procuradora D^a. Luisa Adrover Thomàs y asistido por el Letrado D. Pablo Mir Capellà.

El objeto del recurso es la resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu celebrada el 19 de mayo de 2017, sobre el acuerdo adoptado en el expediente Sancionador por Infracción Urbanística n° 08/16, en el Polígono 3, Parcela 1, Sant Carles de Peralta.

La cuantía del procedimiento se fija en 398.776,50 euros.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la parte actora, a través de su representación procesal, el 2 de noviembre de 2017, se interpuso recurso contencioso-administrativo contra el acto arriba mencionado.

SEGUNDO.- Admitido a trámite y recibido el expediente administrativo, se formalizó demanda mediante la que, tras las alegaciones de hecho y de derecho que estimó pertinentes, suplicó se dictara sentencia por la que estimando el recurso, se declarase la nulidad del acto impugnado, dejándolo sin efecto.

TERCERO.- Por la representación de la parte demandada, el 13 de julio de 2018, se presentó escrito en el que se solicitaba la terminación del proceso por satisfacción extraprocesal y al que se acompañó el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, el día 30 de mayo de 2018, con el siguiente contenido:

"**PRIMERO.-** Revocar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, del de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el acuerdo adoptado en fecha 19 de mayo de 2017, resolutorio del expediente sancionador por Infracción urbanística número 08/16 incoado contra D. [REDACTED] [REDACTED] como responsable de la infracción urbanística cometida sobre la parcela sita en polígono 3, parcela n° 1, Morna, San Carlos.

SEGUNDO.- Declarar la caducidad del expediente sancionador por infracción urbanística número 008/16, incoado contra D. [REDACTED] [REDACTED], y proceder al archivo del mismo.

TERCERO.- Incoar nuevo procedimiento sancionador contra D. [REDACTED] [REDACTED] por los mismos hechos constitutivos de infracción urbanística objeto del expediente disciplinario 08/16.

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Juzgado contencioso administrativo número 3 de Palma para su constancia y efectos en el procedimiento ordinario P.O.150/2017, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 29/1988 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

CUARTO.- Dado traslado a la parte actora, ha presentado escrito en el que se opone a que se tenga por terminado el proceso por satisfacción extraprocesal, por considerar que se trata de caso de allanamiento de la Administración, e interesa la imposición de costas procesales a ésta.

QUINTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Objeto del recurso.

El presente recurso tiene por objeto la resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu celebrada el 19 de mayo de 2017, sobre el acuerdo adoptado en el expediente Sancionador por Infracción Urbanística n° 08/16, en el Polígono 3, Parcela 1, Sant Carles de Peralta.

Mediante dicho acuerdo se imponía sanción por infracción urbanística al Sr. [REDACTED] por la ejecución de obras en dicha parcela.

SEGUNDO.- Reconocimiento de las pretensiones en vía administrativa y allanamiento.

1. El artículo 75.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, prevé que los demandados podrán allanarse cumpliendo los requisitos exigidos en el apartado 2 del artículo anterior, esto es, en el caso de la Administración, deberá aportar testimonio del acuerdo adoptado por el órgano competente. Añadiendo en su número dos que, producido el allanamiento, el Juez o Tribunal, sin más trámites, dictará sentencia de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo si ello supusiere infracción manifiesta del ordenamiento jurídico.

El artículo 76 LJCA se refiere a la terminación del procedimiento por reconocimiento de la pretensión, en los siguientes términos:

"1. Si interpuesto recurso contencioso administrativo la Administración demandada reconociese totalmente en vía administrativa las pretensiones del demandante, cualquiera de las partes podrá ponerlo en conocimiento del Juez o Tribunal, cuanto la Administración no lo hiciera.

2. El Juez o Tribunal oirá a las partes por plazo común de cinco días y, previa comprobación de lo alegado, dictará auto en el que declarará terminado el procedimiento y ordenará el archivo del recurso y la devolución del expediente administrativo, si el reconocimiento no infringiera manifiestamente el ordenamiento jurídico. En este último caso dictará sentencia ajustada a Derecho".

2. En el presente caso, el Ayuntamiento demandado ha adoptado un acuerdo mediante el que ha revocado el acto impugnado, lo que, implícitamente, supone reconocer la pretensión del demandante, sin que se haya adoptado acuerdo expreso acerca del posible allanamiento (figura con la que guarda innegables conexiones materiales).



Siendo así las cosas, y pese a la oposición del recurrente, no cabe sino acordar la terminación del proceso por reconocimiento en vía administrativa de las pretensiones ejercitadas por el demandante, ex artículo 76 LJCA, lo que ha de conllevar la extinción del presente procedimiento por haber quedado ya sin objeto. No puede hablarse, en puridad, de allanamiento, puesto que no se ha adoptado acuerdo en este sentido por parte de la Corporación demandada; ahora bien, que ello sea así, no impide la imposición de costas, como seguidamente detallamos.

El acuerdo adoptado no supone infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, por lo que procederá dictar sentencia, sin más trámites, declarando terminado el proceso y ordenando el archivo de las actuaciones.

TERCERO.- Costas procesales.

Habiéndose adoptado el acuerdo municipal el 30 de mayo de 2018 cuando ya había precluido el trámite de contestación a la demanda por parte de la Administración demandada, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 139 LJCA, se imponen las costas del presente proceso al Ayuntamiento demandado, dado que se han estimado las pretensiones del demandante.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general aplicación, en nombre de SM el Rey,

PARTE DISPOSITIVA

- 1) **SE DECLARA TERMINADO** el presente procedimiento **PO 150/17**, por existir satisfacción extraprocesal de la pretensión. Archívese lo actuado.
- 2) Se imponen las costas procesales a la Administración demandada.

Notifíquese a las partes haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe recurso de apelación, a interponer en el plazo de quince días.

Así lo acuerda, manda y firma D. Pedro Antonio Mas Cladera, Magistrado Juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Palma de Mallorca.

Concuerta bien y fielmente con su original al que me remito y, para que así conste, extiendo y firmo el presente testimonio en PALMA DE MALLORCA, a diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA



**T.S.J.ILLES BALEARS SALA CON/AD
PALMA DE MALLORCA**

SENTENCIA: 00001/2020

Actuacions Jutjat núm. 3 PO 150/2017

N.I.G: 07040 45 3 2017 0001592
Procedimiento: AP RECURSO DE APELACION 0000014 /2019
Sobre PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
De D/ña. AYUNTAMIENTO DE SANTA EULALIA DEL RIO
Abogado: MARIA JOSE LAGOS AGUILAR
Procurador: LLUISA ADROVER THOMAS
Contra D/ña. [REDACTED]
Abogado: PATRICIA DE LAS HERAS FERNANDEZ
Procurador: MARIA ISABEL MUÑOZ GARCIA

SENTÈNCIA núm. 1

Il·lès. Srs. Palma, a 7 de gener de 2020

PRESIDENT:

Gabriel Fiol Gomila.

MAGISTRATS:

Pablo Delfont Maza.

Carmen Frigola Castellón. ----- VISTES per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears el Rotlle d'apel·lació número, dimanant de les actuacions número del Jutjat Contenciós Administratiu número de Palma, tramitades pel procediment ordinari, seguit entre parts, d'una, com a apel·lant, l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu (Eivissa) representat per la procuradora Sra. Adrover Thomas i assistit de la lletrada Sra. Lagos Aguilar, i, com a apel·lada, el Sr. [REDACTED] representat per la procuradora Sra. Muñoz García i dirigida per la lletrada Sra. de las [REDACTED]

L'objecte del recurs és la resolució dictada per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu, del dia 19 de maig de 2017, sobre l'acord adoptat a l'expedient sancionador per infracció en matèria d'infracció urbanística, la número 08/2016, en el Polígon 3, parcel·la 1 a Sant Carles de Peralta.

La quantia es fixà en 398.776,50 €.

El procediment seguit ha estat el previst a la Llei Jurisdiccional 29/1998.

L'Il·lm. Sr. [REDACTED] i Gomila, en qualitat de Magistrat ponent expressà el parer de la Sala.

= ANTECEDENTS DE FET =

1r.- El Jutjat número 3 de l'Ordre Contenciós Administratiu de Palma, el dia 19 de setembre de 2018, dictà la sentència núm. 300, on va decidir el següent:

- “1) SE DECLARA TERMINADO el presente procedimiento PO 150/17, por existir satisfacción extraprocesal de la pretensión. Archívese lo actuado.
- 2) Se imponen las costas procesales a la Administración demandada”.

2n.- Interposat el recurs d'apel·lació per part de la representació de la part demandada, en el termini prefixat en la Llei Jurisdiccional de 1998, se li donà el tràmit processal adequat, oposant-se al mateix la direcció lletrada de la part actora.

3r.- Per provisió s'assenyalà, per a la votació i decisió, el dia 28 de novembre de 2019.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER.- Hem assenyalat a l'encapçalament, que la revisió jurisdiccional ho era de la resolució dictada per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu, del dia 19 de maig de 2017, sobre l'acord adoptat a l'expedient sancionador per infracció en matèria d'infracció urbanística, la número 08/2016, en el Polígon 3, parcel·la 1 a Sant Carles de Peralta.

Acord que suposava la imposició d'una sanció al Sr. [REDACTED] per l'execució d'obres.

La sentència núm. 300, dictada el dia 19 de setembre de 2018, pel Jutjat núm. 3 dels contenciosos administratius de Palma, va acordar donar per acabat el procediment ordinari núm. 150 de 2017, com a conseqüència de l'existència de satisfacció extraprocessal de la pretensió articulada pel recurrent Sr. [REDACTED] S'imposaven íntegrament les costes processals – sense límit quantitatiu – a la demandada.

La motivació, 2n, fonament de dret, ho era en el sentit que:

“En el presente caso, el Ayuntamiento demandado ha adoptado un acuerdo mediante el que ha revocado el acto impugnado, lo que, implícitamente, supone reconocer la pretensión del demandante, sin que se haya adoptado acuerdo expreso acerca del posible allanamiento (figura con la que guarda innegables conexiones materiales).

Siendo así las cosas, y pese a la oposición del recurrente, no cabe sino acordar la terminación del proceso por reconocimiento en vía administrativa de las pretensiones ejercitadas por el demandante, ex artículo 76 LJCA, lo que ha de conllevar la extinción del presente procedimiento por haber quedado ya sin objeto”.

I, afegia, a continuació, en el que es destaca expressament per la part apel·lant:

“No puede hablarse, en puridad, de allanamiento, puesto que no se ha adoptado acuerdo en este sentido por parte de la Corporación demandada; ahora bien, que ello sea así, no impide la imposición de costas, como seguidamente detallamos”.

En el 3r. fonament de dret, a continuació, es deia:

“Habiéndose adoptado el acuerdo municipal el 30 de mayo de 2018 cuando ya había precluido el trámite de contestación a la demanda por parte de la Administración demandada, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 139 LJCA, se imponen las costas del presente proceso al Ayuntamiento demandado, dado que se han estimado las pretensiones del demandante”

Decisió de la sentència emparada en el fet que s'havia produït, precisament, aquest altre acord de la Junta de Govern de l'esmentat Ajuntament de Santa Eulària des Riu, el dia 30 de maig de 2018:

"PRIMERO.- Revocar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, del de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el acuerdo adoptado en fecha 19 de mayo de 2017, resolutorio del expediente sancionador por Infracción urbanística número 08/16 incoado contra D. [REDACTED] como responsable de la infracción urbanística cometida sobre la parcela sita en polígono 3, parcela nº 1, Morna, San Carlos.

SEGUNDO. - Declarar la caducidad del expediente sancionador por infracción urbanística número 008/16, incoado contra D. [REDACTED] y proceder al archivo del mismo.

TERCERO.- Incoar nuevo procedimiento sancionador contra D. [REDACTED] por los mismos hechos constitutivos de infracción urbanística objeto del expediente disciplinario 08/16.

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Juzgado contencioso administrativo número 3 de Palma para su constancia y efectos en el procedimiento ordinario P.0.150/2017, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 29/1988 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa."

Doncs bé, donades les circumstàncies del cas, l'apel·lació, tan sols, s'aixeca contra la imposició de costes processals a la totalitat, efectuada per la sentència d'instància.

SEGON.- L'article 139 de la Llei Jurisdiccional contenciosa administrativa, en la modificació operada per la Llei 37/2011, de 10 d'octubre, preveu el criteri del venciment en la imposició de les costes processals. No obstant, a continuació, en el 1r paràgraf de l'apartat 1, atorga la possibilitat de la no imposició o la reducció quantitativa amb uns límits que ha de valorar, en funció a l'apreciació de si el cas plantejava dutes de fet o de dret.

Article que s'ha de modular amb el contingut dels articles 74, 75, 76 i 77 de l'esmentada Llei rituària en referència a altres maneres de finalitzar el procediment, tal com

aquí s'ha produït i, també, com no, amb quina fase processal ens trobem en el moment en què, com en el cas, es va produir l'acord que suposava la possibilitat de finalitzar el procediment.

Ara bé, i malgrat tot, la sentència apel·lada no ve vinculada per cap tipus de criteri per el qual s'imposin els límits quantitius, tot i a pesar que aquesta ja sigui una pràctica usual en la jurisprudència que dimana de la Sala Tercera del Tribunal Suprem. El jutge està sotmesa a l'imperi de la Llei i, aquesta – l'esmentat article 139 de la 29/1998 -, és taxativa en ordre al criteri del venciment amb l'excepció ja avançada que hi haguessin dubtes de dret o de fet i que vinguessin expressament motivades – aquí ha succeït tot el contrari ja que s'ha motivat la imposició a la totalitat - . A partir de l'anterior afirmació, doncs, la Sala es veu compel·lida a l'expressa confirmació de la sentència d'instància amb el consegüent rebuig del recurs d'apel·lació, independentment que l'acord de la Junta de Govern de l'Ajuntament de l'any 2018 s'hagués produït una vegada havia preclòs el tràmit de contestació a la demanda articulat per la seva direcció lletrada i abans de la pràctica de la prova interessada. El jutge va dictar la sentència d'instància sense vulneració de cap precepte legal.

TERCER.- Es fa expressa imposició de costes processals a la part apel·lant, de conformitat amb l'article 139 de la Llei Jurisdiccional, amb el límit quantitatiu dels 500 € per tots els conceptes.

VIST els articles esmentats i d'altres disposicions de caràcter general

DECIDIM

PRIMER.- **DESESTIMAR** el present recurs d'apel·lació contra la sentència número 300, de 19 de setembre de 2018, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Palma en el si de les seves actuacions 150/2017, tramitades pel procediment ordinari, la qual **CONFIRMEM** en el 2n, punt de la seva decisió referit a la imposició de les costes processals a l'Administració demandada, únic objecte de la present.

SEGON.- S'imposen les costes processals de la present apel·lació a la part apel·lant amb el límit dels 500 € per tots els conceptes.



Contra la present, i conforme a la modificació operada per la Llei Orgànica 7/2015, de 21 de juliol, en quant afecta a la Secció 3era del Capítol III del Títol IV integrada pels articles 86 a 93 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, hi cap recurs de cassació per a davant el Tribunal Suprem en el termini de 30 dies comptador des del següent a la notificació de la sentència amb la forma prevista als citats articles i amb més prenent-se en compte l'acord de la Sala de Govern del Tribunal Suprem de 26 d'abril de 2016, publicat que fou en el BOE núm. 162 de 6 de juliol de 2016.

Si el recurs hagués de fundar-se exclusivament en infracció de normes emanades de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, serà competent aquest Tribunal.

Així per aquesta nostra sentència ho pronunciem, manem i signem.

PUBLICACIÓ.- Llegida i publicada que ha estat l'anterior sentència pel Magistrat d'aquesta Sala II·Im. Sr. Gabriel Fiol i Gomila ponent a aquest tràmit d'Audiència Pública, dono fe. El Secretari, rubricat.